

**No. 41968**

---

**Colombia  
and  
Peru**

**Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru on the promotion and reciprocal protection of investments (with protocol and additional amending protocol of 7 May 2001). Lima, 26 April 1994**

**Entry into force:** *21 March 2001 by notification, in accordance with article 15*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Colombia, 2 November 2005*

---

**Colombie  
et  
Pérou**

**Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements (avec protocole et protocole de modifications supplémentaires du 7 mai 2001). Lima, 26 avril 1994**

**Entrée en vigueur :** *21 mars 2001 par notification, conformément à l'article 15*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Colombie, 2 novembre 2005*

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE  
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados "Las Partes Contratantes",

Deseosos de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos Estados,

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por los nacionales o empresas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un Convenio pueden servir de estímulo a la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos.

**HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:**

**ARTICULO 1º - DEFINICIONES**

Para los efectos del presente Convenio:

- (1) "Inversión" designa todo tipo de activo y en particular, aunque no exclusivamente:
  - (a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales como hipotecas y derechos de prenda;
  - (b) Acciones y cualquier otro tipo de participación en sociedades o derechos generados en contratos de riesgo compartido;
  - (c) Valores, títulos, documentos y papeles financieros, y cualquier otra obligación de carácter contractual que tenga un valor económico;
  - (d) Derechos de propiedad intelectual e industrial;

- (e) Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales;
- (2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades, dividendos, regalías y otros ingresos;
- (3) "Empresas" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y comerciales y demás asociaciones con o sin personería jurídica que ejerzan una actividad económica comprendida en el ámbito del presente Convenio y que estén controladas, directa o indirectamente, por nacionales de una de las Partes Contratantes.
- (4) "Nacionales" designa las personas naturales que de acuerdo con la legislación de cada Parte Contratante tengan la nacionalidad de la misma.
- (5) "Territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las zonas marítimas adyacentes incluyendo el suelo y el subsuelo, y el espacio aéreo, que conforman el territorio de cada una de las Partes Contratantes de acuerdo con su Constitución Política y las normas del Derecho Internacional.

#### ARTICULO 2º - PROMOCION Y PROTECCION A LAS INVERSIONES

Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de su territorio las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones.

#### ARTICULO 3º - TRATAMIENTO A LA INVERSION

- (1) Las inversiones de nacionales o empresas de cada Parte Contratante deberán, en todo momento, recibir un trato justo y equitativo, y deberán gozar de entera protección y seguridad de acuerdo con los principios del Derecho Internacional de manera no menos favorable a aquellas que disfruten las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en su propio territorio.

- (2) Las Partes Contratantes se abstendrán de aplicar medidas arbitrarias o discriminatorias respecto de la administración, mantenimiento, uso, usufructo, o enajenación de inversiones en su territorio de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante.
- (3) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído en relación con las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en su territorio.

**ARTICULO 4º - TRATO NACIONAL Y CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA**

- (1) Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a las inversiones o a las ganancias de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que aquél que conceden a las inversiones o a las ganancias de sus propios nacionales o empresas o a las inversiones o a las ganancias de nacionales o empresas de cualquier tercer Estado.
- (2) Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en lo que se refiere a la administración, mantenimiento, uso, usufructo, o enajenación de inversiones, un trato no menos favorable que aquél que conceden a sus propios nacionales o empresas o a los nacionales o empresas de cualquier tercer Estado.

**ARTICULO 5º - EXCEPCIONES**

Las disposiciones de este Convenio relativas al otorgamiento de un trato no menos favorable que aquél que se otorga a los nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes o de cualquier tercer Estado no se interpretarán de manera que obliguen a una Parte Contratante a extender a los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de:

- (a). Cualquier unión aduanera, mercado común, zona de libre comercio o acuerdo internacional similar, existente o que exista en el futuro, en el cual sea o llegue a ser parte alguna de las Partes Contratantes, o

- (b) Cualquier acuerdo o arreglo internacional relacionado total o principalmente con tributación o cualquier legislación doméstica relacionada total o principalmente con tributación.

**ARTICULO 6º - REPATRIACION DE LOS CAPITALES Y DE LAS GANANCIAS DE INVERSIONES**

- (1) Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, en particular, aunque no exclusivamente de:
  - (a) El capital de la inversión y las reinversiones que se efectúen de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en la que se realizó la inversión.
  - (b) La totalidad de las ganancias.
  - (c) El producto de la venta o liquidación total o parcial de la inversión.
- (2) La transferencia se efectuará en moneda libremente convertible, a la tasa de cambio de mercado aplicable el día de la transferencia, y sin restricción o demora.
- (3) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Partes Contratantes podrán establecer restricciones a la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión en caso de dificultades graves de sus balanzas de pagos. En todo caso, dicha facultad se ejercerá por un período limitado, de manera equitativa, de buena fe y no discriminatoria.

**ARTICULO 7º - EXPROPIACIONES Y MEDIDAS EQUIVALENTES**

- (1) Las inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte Contratante, a:
  - (a) nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de las Partes Contratantes tome el control de ciertas actividades consideradas estratégicas de conformidad con su legislación interna, o servicios, o

- (b) cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente,

salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo a ley, de manera no discriminatoria por motivos expresamente establecidos en las Constituciones Políticas respectivas y que se señalan en el Ad Artículo (7) (1) del Protocolo adjunto, relacionados con las necesidades internas de esa parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva.

- (2) La compensación por los actos referidos a los párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, de conformidad con los principios del Derecho Internacional, ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente antes de que las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran de conocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá incluir intereses hasta el día del pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente realizable y ser libremente transferible de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 6 sobre repatriación de capitales y ganancias de las inversiones, siempre y cuando aún en caso de dificultades excepcionales de la balanza de pagos se garantice la transferencia de por lo menos una tercera parte anual.
- (3) El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de acuerdo con la ley de la Parte Contratante que adopta la medida pertinente, a un revisión pronta, por parte de una autoridad competente de esa Parte Contratante, de su caso y de la valoración de su inversión conforme a los principios establecidos en los párrafos (1) y (2) de este artículo.
- (4) Si una Parte Contratante adopta alguna de las medidas referidas en los párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, en relación con los activos de una empresa incorporada o constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su territorio, en la cual nacionales o empresas de la otra Parte Contratante son propietarios de acciones, debe asegurar que las disposiciones de los párrafos (1) al (3) de este artículo se apliquen de manera que garanticen una compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inversión de estos nacionales o empresas de la otra Parte Contratante propietarios de las acciones.
- (5) Nada de lo dispuesto en este Convenio obligará a cualquiera de las Partes Contratantes a proteger inversiones de personas involucradas en actividades criminales graves.

**ARTICULO 8º - COMPENSACIONES POR PERDIDAS**

- (1) Los nacionales o empresas de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, estado de sitio, insurrección u otros eventos similares, en el territorio de la otra Parte Contratante, serán tratados por esta última no menos favorablemente que a sus propios nacionales o empresas, o a nacionales o empresas de cualquier tercer Estado en lo que respecta a restituciones, compensaciones e indemnizaciones. Dichas restituciones, compensaciones e indemnizaciones resultantes serán libremente transferibles de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del presente Convenio.
  
- (2) Sin perjuicio del párrafo (1) de este artículo, en el evento en que los nacionales o empresas de una Parte Contratante sufran en alguna de las situaciones referidas en el mencionado párrafo la ocupación de su propiedad por actos de fuerza de autoridades de la otra Parte Contratante, ésta se les restituirá. Si resultan pérdidas por daños a su propiedad causados por actos de fuerza de autoridades de la otra Parte Contratante que no eran requeridas por las necesidades de la situación, se les otorgará una compensación adecuada. Los pagos resultantes deberán ser libremente transferibles de acuerdo con el artículo 6 de este Convenio.

**ARTICULO 9º - SUBROGACION**

- (1) Si una de las Partes Contratantes o su agente autorizado efectúa pagos a sus nacionales o empresas en virtud de una garantía otorgada por una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del artículo 13 corresponderían a la primera Parte Contratante, reconocerá la subrogación en todos los derechos de aquellos nacionales o empresas a la primera Parte Contratante o a su agente autorizado, bien sea por disposición legal o por acto jurídico.
  
- (2) Asimismo, la otra Parte Contratante reconocerá la causa y el alcance de la subrogación de la primera Parte Contratante o de su agente autorizado en todos los derechos del titular anterior, conferidos de acuerdo con el presente Convenio.

**ARTICULO 10º - APLICACION DEL CONVENIO**

El presente Convenio se aplicará a las inversiones realizadas por los nacionales o empresas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante antes o después de la entrada en vigencia de este Convenio.

**ARTICULO 11º - TRATO MAS FAVORABLE**

Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de lo convenido por las Partes Contratantes más allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación prevalecerá sobre el mismo, en cuanto sea más favorable.

**ARTICULO 12º - ARREGLO DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE  
CONTRATANTE Y UN NACIONAL O EMPRESA DE LA  
OTRA PARTE CONTRATANTE**

- (1) Las controversias de naturaleza jurídica que surjan entre una Parte Contratante y un nacional o empresa de la otra Parte Contratante en relación con las inversiones de que trata el presente Convenio deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.
- (2) Si una controversia no pudiera dirimirse de manera amigable por las partes dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación escrita del reclamo, podrá someterse al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera realizado la inversión, o al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (en adelante denominado "el Centro").



- (3) Cada Parte Contratante por este Convenio consiente en someter al Centro cualquier controversia de naturaleza jurídica que surja entre esa Parte Contratante y un nacional o empresa de la otra Parte Contratante relacionada con una inversión de ésta en el territorio de la primera para su arreglo por medio de conciliación o arbitraje, según lo dispuesto en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados abierto para firma en Washington el 18 de marzo de 1965.
  
- (4) Una empresa que esté incorporada o constituida bajo la ley vigente en el territorio de una Parte Contratante y en la cual antes de que surja la controversia, la mayoría de las acciones eran de propiedad de los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante se tratará, de acuerdo con el artículo 25 (2) (b) del Convenio, como una empresa de la otra Parte Contratante para efectos de los dispuesto en el mencionado Convenio.
  
- (5) Si el nacional o empresa afectado también consiente por escrito en someter la controversia al Centro para la resolución de ésta mediante conciliación o arbitraje de acuerdo con el Convenio, cualquiera de las partes puede iniciar el procedimiento dirigiendo una solicitud a tal efecto al Secretario General del Centro conforme a lo previsto en los artículos 28 y 36 del Convenio. En caso de desacuerdo respecto de si la conciliación o el arbitraje es el procedimiento más apropiado, el nacional o empresa que es parte en la diferencia tendrá el derecho a elegir. La Parte Contratante que es parte en la controversia no presentará como objeción en cualquier etapa del proceso o del cumplimiento del laudo, el hecho de que el nacional o empresa, que es la otra parte en la controversia, haya recibido una indemnización total o parcial de sus pérdidas, en cumplimiento de un contrato de seguro.

No obstante las disposiciones anteriores, el Centro no tendrá jurisdicción si la parte que inicia el procedimiento ha acordado, acuerda someter o somete la controversia a los Tribunales Administrativos o Judiciales de la Parte Contratante que es parte en la controversia.

- (7) Ninguna Parte Contratante buscará resolver por la vía diplomática una controversia remitida al Centro, a menos que:
- (a) El Secretario General del Centro, o una comisión de conciliación o un tribunal de arbitraje constituido por el mismo, decida que la diferencia no se encuentra dentro de la jurisdicción del Centro, o
  - (b) La otra Parte Contratante incumpla un laudo dictado por un tribunal de arbitraje.

**ARTICULO 13º - ARREGLO DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES**

- (1) Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes, a través de sus canales diplomáticos.
- (2) Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de tres meses, contado desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la controversia la haya promovido, será sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.
- (3) El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada Parte Contratante nombrará un miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses y el Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la controversia a un tribunal arbitral.
- (4) Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran observados, y a falta de otro arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o se hallase impedido por otra causa de realizar dichos

nombramientos, corresponderá al Vicepresidente efectuar los mismos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las dos Partes Contratantes o si se hallase también impedido de realizar dichos nombramientos, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los mismos.

- (5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados en partes iguales por las dos Partes Contratantes. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.

#### **ARTICULO 14º - INTERRUPCION DE RELACIONES DIPLOMATICAS O CONSULARES**

Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares entre las Partes Contratantes.

#### **ARTICULO 15º - ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION DEL CONVENIO**

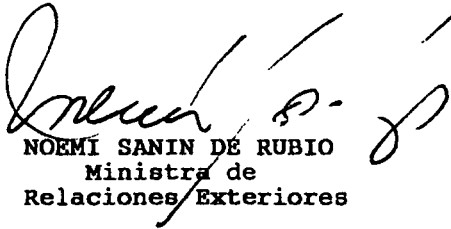
- (1) Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cuando las exigencias de sus respectivas legislaciones para la entrada en vigencia del presente Convenio se hayan cumplido.
- (2) El presente Convenio entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la segunda notificación. Su validez será de diez años y se prorrogará después por tiempo indefinido, a menos que una de las Partes Contratantes comunique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado doce meses antes de su expiración.

- (3) Para inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Convenio, éste seguirá rigiendo durante los diez años subsiguientes a dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Convenio.

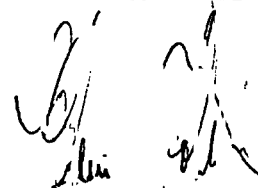
HECHO en la ciudad de Lima, el día veintiseis de abril de 1994, en dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA DE COLOMBIA



NOEMI SANIN DE RUBIO  
Ministra de  
Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA DEL PERU



EFRAIN SOLDENBERG SCHREIBER  
Presidente del Consejo de  
Ministros y Ministro de  
Relaciones Exteriores

## PROTOCOLO

En el acto de la firma del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los abajo firmantes han convenido además las disposiciones siguientes, que constituyen parte integrante del mismo:

### Ad Artículo 1 (1)

La República de Colombia no considera los préstamos como inversiones.

### Ad Artículos 3 (2) y 4

La República de Colombia podrá establecer o mantener limitaciones relativas al otorgamiento de trato nacional exclusivamente en los siguientes sectores:

- (a) Adquisiciones que se puedan efectuar mediante inversiones de portafolio;
- (b) Servicios públicos (telecomunicaciones, energía y acueducto y alcantarillado);
- (c) Suministro de bienes y servicios al sector público; y,
- (d) Ensemble automotriz.

La República de Colombia no aplicará a los nacionales o empresas de la República del Perú las limitaciones anteriormente mencionadas, en la medida en que las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena así lo establezcan, de conformidad con los artículos 5 y 11 de este Convenio.

### Ad Artículo 7 (1)


Los motivos expresamente establecidos en las Constituciones Políticas respectivas son:

- (a) Para la República de Colombia, utilidad pública o interés social; y,
- (b) Para la República del Perú, seguridad nacional o necesidad pública.

**Ad Artículo 12**

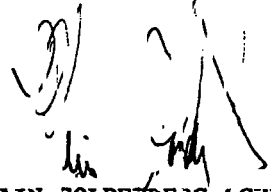
Hasta cuando la República de Colombia adhiera al Convenio al que se refiere el párrafo (3) del artículo 12, cualquier diferencia en la que sea parte y que sea sometida al Centro se le dará un trato conforme con el Mecanismo Complementario para la administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Encuesta.

**POR EL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA DE COLOMBIA**



**NOEMI SANIN DE RUBIO**  
Ministra de  
Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA DEL PERU**



**EFRAIN GOLDBERG SCHREIBER**  
Presidente del Consejo de  
Ministros y Ministro de  
Relaciones Exteriores

**PROCOLO MODIFICATORIO ADICIONAL AL  
CONVENIO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES  
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DEL PERÚ**

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú;

Con el fin de crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra;

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones, sirve para estimular la iniciativa comercial individual y aumentar la prosperidad en ambos Estados; y,

Con el ánimo de poner en vigor el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, celebrado en Lima el 26 de abril de 1994.

Han acordado lo siguiente:

**ARTÍCULO 1**

El artículo 7° del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quedará así:

**EXPROPIACIONES Y MEDIDAS EQUIVALENTES**

- (1) Las inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte Contratante, a:
  - a) nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de las Partes Contratantes tome el control de ciertas actividades consideradas estratégicas de conformidad con su legislación interna, o servicios, o
  - b) cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente.Salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo a la ley, de manera no discriminatoria, por motivos expresamente establecidos en las Constituciones respectivas y que se señalan en el Ad Artículo (7) (1) del Protocolo adjunto, relacionados con las necesidades internas de esa Parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva.
- (2) La compensación por los actos referidos a los párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, de conformidad con los principios del derecho internacional, ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente antes de que las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran de conocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá incluir intereses hasta el día de pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente realizable y ser libremente transferible, de acuerdo con las reglas estipuladas en el Artículo (6) sobre repatriación de los capitales y de las ganancias de inversiones, siempre y cuando aún en caso de dificultades excepcionales de balanza de pagos se garantice la transferencia de por lo menos una tercera parte anual.
- (3) El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de acuerdo con la Ley de la Parte Contratante que adopta la medida pertinente, a una revisión pronta, por parte de la autoridad competente de esa Parte, de su caso y de la valoración de su inversión, de acuerdo con los principios establecidos en los párrafos (1) y (2) de este artículo.
- (4) Si una Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en los párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, en relación con los activos de una empresa incorporada o constituida de acuerdo con la Ley vigente en cualquier parte de su territorio, en el cual nacionales o empresas de la otra Parte Contratante son propietarios de acciones, deberá asegurar que las disposiciones de los párrafos (1) al (3) de este artículo se apliquen de manera que garanticen una compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inversión de estos nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, propietarios de las acciones.
- (5) En ningún caso lo dispuesto en este Convenio obligará a cualquiera de las Partes Contratantes a proteger inversiones realizadas con capitales o activos que de conformidad con la legislación de cada Parte Contratante, se determine que provienen de actividades delictivas.

- (6) En lo que respecta a Colombia, nada de lo dispuesto en este Convenio prohibirá que, de conformidad con la Ley, con finalidad de interés público o social, se establezcan monopolios como arbitrio rentístico, previa indemnización plena de los inversionistas que queden privados del ejercicio de una actividad económica lícita teniendo en cuenta las condiciones aplicables del presente artículo.

#### ARTÍCULO 2

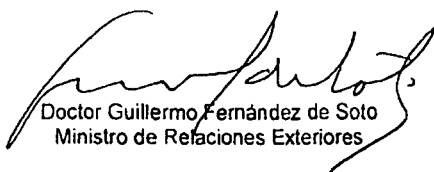
Nada de lo dispuesto en el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú por el cual se promueven y protegen las inversiones, celebrado en Lima el 26 de abril de 1994, ni lo dispuesto en el presente Protocolo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas destinadas a preservar el orden público.

#### ARTÍCULO 3

El presente Protocolo es parte integrante del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, celebrado en Lima, el 26 de abril de 1994 y entrará en vigor en la fecha en que lo haga el citado Convenio.

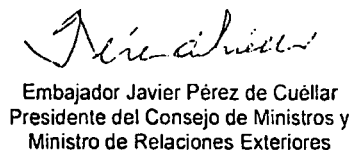
Hecho en Lima, a los siete días del mes de mayo de 2001, en dos ejemplares del mismo tenor, en idioma castellano, siendo ambos igualmente idénticos.

Por el Gobierno de  
la República de Colombia



Doctor Guillermo Fernández de Soto  
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de  
la República del Perú



Embajador Javier Pérez de Cuéllar  
Presidente del Consejo de Ministros y  
Ministro de Relaciones Exteriores



[TRANSLATION -- TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States;

Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognizing that the promotion and protection of investments on the basis of an Agreement may serve to stimulate private economic initiative and increase the wellbeing of both peoples;

Have agreed as follows:

*Article 1. Definitions*

For the purposes of the present Agreement:

1. The term “investment” shall comprise every kind of asset and more particularly, though not exclusively:

(a) Movable and immovable property and other rights *in rem*, such as mortgages and lien rights;

(b) Shares and any other kind of participation in companies or rights generated in shared-risk contracts;

(c) Securities, bonds, financial documents and papers, and any other obligation of a contractual nature, having an economic value;

(d) Intellectual and industrial property rights;

(e) Rights granted under law or by virtue of a contract for the exercise of an economic activity, including rights to prospect, explore and extract natural resources.

2. The term “returns” shall mean the amounts yielded by an investment made in conformity with this Agreement, such as profits, dividends, royalties or other income;

3. The term “companies” shall mean all legal entities, including companies regulated by the civil and commercial codes and other associations with or without juridical personality, that are carrying out an economic activity included within the scope of the present Agreement and are controlled directly or indirectly by nationals of one of the Contracting Parties.

4. The term “nationals” shall comprise natural persons having the nationality of either Contracting Party in accordance with its law.

5. The term “territory” shall mean, in addition to the areas enclosed by the terrestrial limits, the adjacent maritime areas, including the sea-bed and sub-soil, and the airspace, which comprise the territory of each of the Contracting Parties in accordance with its political constitution and international law.

*Article 2. Promotion and protection of investments*

Each Contracting Party shall promote in its territory the investments of nationals or companies of the other Contracting Party, admitting them in accordance with its laws or regulations.

*Article 3. Treatment of investments*

1. The investments of nationals or companies of each Contracting Party shall at all times receive fair and equitable treatment and shall enjoy complete protection and security in accordance with the provisions of international law, to an extent no less favourable than that enjoyed by nationals or companies of the other Contracting Party in its own territory.

2. The Contracting Parties shall not apply arbitrary or discriminatory measures with respect to the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall fulfil any other commitment that it has undertaken in relation to the investments of nationals or companies of the other Contracting Party in its territory.

*Article 4. National and most-favoured-nation treatment*

1. The Contracting Parties shall grant in their territory to investments of nationals or companies of the other Contracting Party, and also to the returns therefrom, treatment which is no less favourable than that accorded to the investments and returns of its own nationals or companies or to the investments and returns of nationals or companies of any third State.

2. The Contracting Parties shall in their territory accord to the nationals or companies of the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment, or disposal of investments, treatment which is not less favourable than that which they accord to their own nationals or companies or to the nationals or companies of any third State.

*Article 5. Exceptions*

The provisions of this Agreement relative to the granting of treatment no less favourable than that accorded to the nationals or companies of the either of the Contracting Parties or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the nationals or companies of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege arising out of:

(a) Any existing or future customs union, common market or free trade area or similar international agreement to which either of the Contracting Parties is or may become a party; or

(b) Any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

*Article 6. Repatriation of the principal of and returns on investments*

1. Each Contracting Party shall guarantee to the nationals or companies of the other Contracting Party the free transfer of the payments relating to an investment, and in particular although not exclusively:

(a) The principal of investments and reinvestments that are made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in which the investment takes place;

(b) The entire amount of the returns;

(c) The yield from the sale or the total or partial liquidation of the investment.

2. The transfer shall be made in freely convertible currency, at the market exchange rate applicable on the day of the transfer, and without restriction or delay.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the Contracting Parties shall be entitled to enforce restrictions on the free transfer of payments relating to an investment in the event of major difficulties in their balances of payments. In any event, such dispensation shall apply for a limited period, in an equitable, good faith and non-discriminatory manner.

*Article 7. Expropriation and equivalent measures*

I. The investments of nationals or companies of either of the Contracting Parties shall not be subject, in the territory of the other Contracting Party, to:

(a) Nationalization or equivalent measures, by way of which one of the Contracting Parties takes control of certain activities considered to be strategic under its domestic legislation, or services, or

(b) Any other form of expropriation or measures which have an equivalent effect, except where any of these measures are carried out in accordance with the law, in a non-discriminatory manner for reasons expressly established in the respective political constitutions and that are described in the provision "On article 7, paragraph I", of the annexed Protocol, having to do with the internal needs of that Party and with a rapid, sufficient and effective compensation.

2. The compensation for the occurrences referred to in paragraphs I (a) and (b) of this article, in conformity with the principles of international law, shall amount to the genuine value of the investment immediately before the measures were taken or before the imminent measures were publicly known, whichever shall occur earlier. The compensation shall include interest up to the day of payment, shall be paid without unjustified delay, shall be genuinely realizable and shall be freely transferable in accordance with the rules set forth in article 6 on the repatriation of principal of and returns on investments, provided that even

in cases of exceptional difficulties relating to the balance of payments, the transfer of at least one third of the total amount per year shall be guaranteed.

3. The national or company affected shall have the right, under the law of the Contracting Party that takes the measure in question, to a prompt review by a competent authority of that Contracting Party of its case and of the valuation of its investment in conformity with the principles established in paragraphs 1 and 2 of this article.

4. If a Contracting Party adopts any of the measures described in paragraphs 1 (a) and (b) of this article, relating to the assets of a company incorporated or established in accordance with the law in force in any part of its territory, in which nationals or companies of the other Contracting Party are shareholders, it shall ensure that the provisions of paragraphs 1 to 3 of this article are applied in a way that guarantees a rapid, sufficient and effective compensation with respect to the investment of those nationals or companies of the other Contracting Parties who are shareholders.

5. Nothing in the provisions set forth in this agreement shall oblige either of the Contracting Parties to protect investments of persons involved in serious criminal activities.

#### *Article 8. Compensation for losses*

1. The nationals or companies or one of one of the Contracting Parties who suffer loss in their investments as a result of war or other armed conflict, revolution, national state of emergency, state of siege, insurrection or other similar events in the territory of the other Contracting Party shall be treated by the latter no less favourably than its own nationals or companies, or than the nationals or companies of any third State, with respect to the restitution, compensation and indemnification. Such resulting restitution, compensation and indemnification shall be freely transferable in line with the content of article 6 of this Agreement.

2. Notwithstanding the provisions in paragraph 1 of this article, in the event that the nationals or companies of one Contracting Party, in any of the situations listed in that paragraph, suffer the occupation of their property by acts of force of the authorities of the other Contracting Party, the latter shall make restitution. If losses occur due to damage to their property caused by acts of force of the authorities of the other Contracting Party which were not required by the exigencies of the situation, appropriate compensation shall be granted. The resultant payments must be freely transferable in line with article 6 of this Agreement.

#### *Article 9. Subrogation*

1. If one of the Contracting Parties or its authorized agent makes payments to its own nationals or companies by virtue of a guarantee granted for an investment against non-commercial risk in the territory of the other Contracting Party, the latter, without prejudice to the rights which will pertain to the first Contracting Party by virtue of article 13, shall recognize the subrogation of all the rights of those nationals or companies to the first Contracting Party or to its authorized agent, whether by legal disposition or by juridical act.

2. Additionally, the other Contracting Party shall recognize the cause and the reach of the subrogation of the first Contracting Party or of its authorized agent of all the rights of the previous holder, conferred in line with the provisions of this Agreement.

*Article 10. Application of the Agreement.*

This Agreement shall apply to investments made by nationals or companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party both before and after the entry into force of this Agreement.

*Article 11. Most favourable treatment*

If the legal regime of one of the Contracting Parties, or anything agreed by the Contracting Parties over and above what is stipulated in this Agreement, should give rise to a general or special settlement under which the investments of the nationals or companies of the other Contracting Party would have to receive treatment more favourable than that provided for in this Agreement, such a settlement shall take precedence over the latter, wherever it is more favourable.

*Article 12. Settlement of disputes between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party*

1. Disputes of a legal nature which arise between one Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party with reference to investments covered by this Agreement shall, to the extent possible, be amicably settled between the parties to the dispute.

2. If a dispute cannot be settled in an amicable fashion by the parties within three months following the date of the written notification of the complaint, it may be submitted to the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment had been made, or to the international arbitration of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter referred to as "the Centre").

3. Under this Agreement, each Contracting Party consents to submit to the Centre any dispute of a legal nature which may arise between that Contracting Party and a national or company of the other Contracting Party, related to an investment of the latter in the territory of the first, for regulation through conciliation or arbitration, as provided for in the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature in Washington on 18 March 1965.

4. A company which is incorporated or established under the law in force in the territory of one Contracting Party and in which before the dispute arose the majority of the shares were held by nationals or companies of the other Contracting Party will be treated, in accordance with article 25, paragraph 2 (b) of the Convention, like a company of the other Contracting Party for the purposes of the provisions set forth in that Convention.

5. If the national or company in question also consents in writing to submit the dispute to the Centre for resolution by the latter by means of conciliation or arbitration, in line

with the provisions of the Convention, either of the parties may initiate the proceedings by submitting a request to that end to the Secretary-General of the Centre in line with the provisions set forth in articles 28 and 36 of the Convention. In the event of disagreement with respect to whether conciliation or arbitration is the more appropriate procedure, the national or company which is a party to this dispute shall have the right to make a selection. The Contracting Party that is a party to the dispute shall not present as an objection at any stage of the proceedings or of the completion of the judgement the fact that the national or company, namely the opposing party in the dispute, had received total or partial compensation for its losses under the terms of an insurance policy.

6. Notwithstanding the preceding provisions, the Centre shall not have jurisdiction if the party initiating the proceedings has agreed, agrees to submit or submits the dispute to the administrative or judicial courts of the Contracting Party that is also a party to a dispute.

7. Neither Contracting Party shall seek to resolve through the diplomatic channel any dispute submitted to the Centre, unless:

(a) The Secretary-General of the Centre, or a Conciliation Commission, or an arbitration tribunal set up by the latter, should decide that the dispute does not fall within the jurisdiction of the Centre, or

(b) The other Contracting Party fails to comply with a judgement pronounced by an arbitration tribunal.

*Article 13. Resolution of disputes between the Contracting Parties*

1. Disputes which may arise between the Contracting Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by the Governments of the two Contracting Parties through the diplomatic channel.

2. If a dispute cannot be resolved in this way, within a period of three months from the date on which one of the Contracting Parties has initiated it, it shall be submitted to an arbitration tribunal at the request of one of the Contracting Parties.

3. The arbitration tribunal shall be established on an ad hoc basis. Each Contracting Party shall appoint one member and the two members shall agree to elect as the President a national of a third state which shall be selected by the Governments of the two Contracting Parties. The members shall be nominated and appointed within a period of two months and the President within a period of three months, from the time when one of the Contracting Parties has notified the other that it wishes to submit the dispute to an arbitration tribunal.

4. If the deadlines provided for in paragraph 3 are not observed, and in the absence of any other arrangement, either Contracting Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. In the event that the President should be a national of one of the Contracting Parties or should find himself prevented for other reasons from making the appointments, it shall be the task of the Vice-President to perform them. If the Vice-President should also be a national of one of the Contracting Parties or should also find himself prevented from making these appointments, it shall be the responsibility of the next senior member of the Court who is not a national of one of the Contracting Parties to make the appointments.

5. The arbitration tribunal shall take its decisions by simple majority. Its decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the costs caused by the activity of its own arbitrator, as well as the costs of its representation at the arbitration proceedings. The costs of the President, and as well as any other costs, shall be born in equal parts by the two Contracting Parties. The arbitration tribunal shall determine its own way of proceeding.

*Article 14. Interruption of diplomatic or consular relations*

The provisions of this Agreement shall continue to be fully applicable regardless of whether or not there are diplomatic or consular relations between the Contracting Parties.

*Article 15. Entry into force, duration and termination of the agreement*

1. The Contracting Parties shall notify one another when the requirements of their respective legislations for the entry into force of this Agreement have been complied with.

2. The present Agreement shall enter into force thirty days after the date of the second such notification. It shall be valid for ten years and shall then be extended for an indefinite time unless one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate it twelve months before its expiry.

3. For investments made before the date of termination of this Agreement, the Agreement shall continue to have controlling effect for a period of ten years following that date.

In witness whereof, the signatories below, duly authorized for the purpose by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in the city of Lima on the twenty-sixth day of April 1994, in two copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

NOEMI SANIN DE RUBIO  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Peru:

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER  
President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs

PROTOCOL

Upon signature of the Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, the signatories below have additionally agreed the following provisions, which form an integral part of the Agreement:

On article 1, paragraph 1

The Republic of Colombia does not consider loans as investments.

On articles 3, paragraph 2, and 4

The Republic of Colombia shall be empowered to establish or maintain limits relating to the granting of national treatment exclusively in the following sectors:

- (a) Acquisitions which may be made by means of portfolio investments;
- (b) Public services (telecommunications, energy, water supply and sewage systems);
- (c) Supply of goods and services to the public sector, and
- (d) Automobile assembly.

The Republic of Colombia shall not apply to the nationals or companies of the Republic of Peru the limitations mentioned above to the extent that the rules of the legal regime of the Cartagena Agreement so stipulate, in conformity with articles 5 and 11 of this Agreement.

On article 7, paragraph 1

The reasons explicitly laid down in the political constitutions of the two countries respectively are:

- (a) For the Republic of Colombia, public utility or social interest; and
- (b) For the Republic of Peru, national security or public necessity.

On article 12

Until such time as the Republic of Colombia joins the Convention referred to in paragraph 3 of article 12, any dispute to which it is a party and which is submitted to the Centre shall be treated in conformity with the Supplementary Mechanism for Administration of Conciliation, Arbitration and Investigation Procedures

For the Government of the Republic of Colombia

NOEMI SANIN DE RUBIO  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Peru:

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER  
President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs



ADDITIONAL AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru,

In order to create favourable conditions for investments made by investors of each of the Contracting Parties in the territory of the other;

Recognizing that the promotion and protection of investments on the basis of an Agreement may serve to stimulate private economic initiative and increase the wellbeing of both peoples;

With the intention of putting into force into effect the Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, concluded in Lima on 26 April 1994;

Have agreed as follows:

*Article I*

Article 7 of the Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments shall be re-expressed as follows:

*Expropriation and equivalent measures*

I. The investments of nationals or companies of either of the Contracting Parties shall not be subject, in the territory of the other Contracting Party, to:

(a) Nationalization or equivalent measures, by way of which one of the Contracting Parties takes control of certain activities considered to be strategic under its domestic legislation, or services, or

(b) Any other form of expropriation or measures which have an equivalent effect except where any of these measures are carried out in accordance with the law, in a non-discriminatory manner, for reasons expressly established in the respective constitutions and described in the provision "On article 7, paragraph I", of the annexed Protocol, having to do with the internal needs of that Party and with a rapid, sufficient and effective compensation.

2. The compensation for the occurrences referred to in paragraphs I (a) and (b) of this article, in conformity with the principles of international law, shall amount to the genuine value of the investment immediately before the measures were taken or before the imminent measures were publicly known, whichever shall occur earlier. The compensation shall include interest up to the day of payment, shall be paid without unjustified delay, shall be genuinely realizable and shall be freely transferable in accordance with the rules set forth in article 6 on the repatriation of principal of and returns on investments, provided that even

in cases of exceptional difficulties relating to the balance of payments, the transfer of at least one third of the total amount per year shall be guaranteed.

3. The national or company affected shall have the right, under the law of the Contracting Party that takes the measure in question, to a prompt review by a competent authority of that Contracting Party of its case and of the valuation of its investment in conformity with the principles established in paragraphs 1 and 2 of this article.

4. If a Contracting Party adopts any of the measures described in paragraphs 1 (a) and (b) of this article, relating to the assets of a company incorporated or established in accordance with the law in force in any part of its territory, in which nationals or companies of the other Contracting Party are shareholders, it shall ensure that the provisions of paragraphs 1 to 3 of this article are applied in a way that guarantees a rapid, sufficient and effective compensation with respect to the investment of those nationals or companies of the other Contracting Parties who are shareholders.

5. Nothing in the provisions set forth in this Agreement shall oblige either of the Contracting Parties to protect investments made with capital or assets which, under the legislation of either Contracting Party, are determined to originate in criminal activities.

6. In the case of Colombia, nothing in the provisions of this Agreement shall prevent the establishment of monopolies, in conformity with the law and in the public or social interest, for purposes of raising public revenues, following full compensation of the investors who are deprived of the exercise of a licit economic activity, taking into account the applicable conditions of this article.

#### *Article 2*

Nothing provided for in the Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru by which investments are promoted and protected, concluded in Lima on 26 April 1994, nor the provisions of this Protocol, shall be interpreted as preventing a Party from adopting or maintaining measures intended to preserve public order.

#### *Article 3*

This Protocol shall be an integral part of the Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Peru on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, concluded in Lima on 26 April 1994, and shall enter into force on the same date as that Agreement.

Done in Lima on the seventh day of the month of May 2001, in two identical copies, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

DR. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Peru:

AMBASSADOR JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR  
President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommée “les Parties contractantes”,

Désireux d'intensifier la coopération économique à l'avantage mutuel des deux États,

Afin de créer des conditions favorables aux investissements des ressortissants ou des entreprises de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

Reconnaissant que l'encouragement et la protection de ces investissements sur la base d'un Accord auront pour effet de stimuler l'esprit d'entreprise privée et est d'augmenter le bien-être des deux peuples.

Sont convenues de ce qui suit :

*Article premier. Définitions*

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme “investissement” désigne toutes les catégories d'avoirs, notamment mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles et tous les autres droits réels tels que les hypothèques ou droits de gage;

b) les actions et autres formes de participation dans des sociétés ou les droits découlant de contrats de risques partagés;

c) les valeurs, titres, pièces et documents financiers, et autres formes d'obligations à caractère contractuel ayant une valeur économique;

d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle;

e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat pour l'exercice d'une activité économique, notamment les concessions relatives à la prospection, l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles;

2. Le terme “revenus” désigne les sommes résultant d'investissements réalisés en application du présent Accord, tels que les bénéfices, les dividendes, les redevances ou autres revenus;

3. Le terme “entreprise” désigne toutes les personnes juridiques, notamment les sociétés civiles commerciales et autres associations dotées ou non de la personnalité juridique exerçant une activité économique relevant du champ d'application du présent Accord et contrôlées, directement ou indirectement, par des ressortissants de l'une des Parties contractantes.

4. Le terme “ressortissants” désigne les personnes physiques qui, conformément à la législation de chaque Partie contractante, disposent de sa nationalité.

5. Le terme “territoire” désigne, en plus des zones comprises entre les frontières terrestres, les zones maritimes et l'espace aérien adjacent, le sol et le sous-sol, faisant Partie du territoire de chacune des Parties contractantes conformément à sa Constitution politique et aux règles du droit international.

#### *Article 2. Promotion et protection des investissements*

Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire les investissements effectués par les ressortissants ou les entreprises de l'autre Partie contractante et les autorise conformément à ses lois et réglementations.

#### *Article 3. Traitement des investissements*

1. Les investissements des ressortissants ou entreprises de l'une des Parties contractantes doivent, à tout moment, recevoir un traitement juste et équitable, bénéficiant d'une pleine et entière protection et d'une sécurité totale conformément aux principes de droit international, de manière non moins favorable que celle dont jouissent les investissements des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante sur son propre territoire.

2. Les Parties contractantes s'abstiennent d'appliquer des mesures arbitraires ou discriminatoires concernant l'administration, la gestion, l'utilisation, l'usufruit ou la cession des investissements sur son territoire par des ressortissants ou des entreprises de l'autre Partie contractante.

3. Chaque Partie contractante respecte tous autres engagements contractés concernant les investissements de ressortissants ou d'entreprises de l'autre Partie contractante sur son territoire.

#### *Article 4. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée*

1. Les Parties contractantes, sur leur territoire, accorderont aux investissements ou aux ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements ou aux biens de ses propres ressortissants ou entreprises ou des investissements ou bien un de ressortissants d'entreprise de tout autre État tiers.

2. Les Parties contractantes accordent, sur leur territoire, aux ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne l'administration, la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle reconnaît à ses propres ressortissants ou entreprises ou aux ressortissants ou entreprises de tout autre État tiers.

*Article 5. Exceptions*

Les dispositions du présent Accord relatif à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou entreprises de l'une des Parties contractantes ou de tout État tiers ne peuvent être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un traitement, d'une préférence ou d'un privilège qui peut être accordé en raison :

a) d'une union douanière, d'un marché commun, d'une zone de libre-échange ou d'un accord international ayant des effets similaires, présents ou futurs, auxquelles l'une aux l'autre des Parties contractantes est ou pourrait devenir Partie; ou

b) de tout Accord au arrangement international portant en totalité ou principalement sur la fiscalité, ou de toute législation interne portant en totalité ou principalement sur la fiscalité.

*Article 6. Rapatriement des capitaux et des bénéfices des investissements*

1. Chaque Partie contractante garantit aux ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante le libre transfert des paiements liés à un investissement, notamment mais non exclusivement concernant :

a) le capital d'investissement et les réinvestissements effectués conformément aux lois et règlements de la Partie contractante dans laquelle l'investissement est réalisé.

b) la totalité des bénéfices.

c) le produit de la vente ou la liquidation totale ou Partielle de l'investissement.

2. Le transfert s'effectue en devises librement convertibles, au taux de change du marché applicable le jour du transfert, et sans restriction ni retard.

3. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les Parties contractantes pourront restreindre le libre transfert des paiements liés à un investissement en cas de difficultés graves de sa balance des paiements. En toute hypothèse, cette possibilité ne peut s'exercer que pendant une durée limitée, de manière équitable, de bonne foi et sans discrimination.

*Article 7. Expropriations et mesures équivalentes*

1. Les investissements de ressortissants ou d'entreprises de l'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante :

a) d'une nationalisation ou de mesures équivalentes, par le biais desquelles l'une des Parties contractantes prend le contrôle de certaines activités considérées comme stratégiques dans sa législation interne, ou services, ou

b) tout autre forme d'expropriation ou de mesures ayant un effet équivalent,

Sauf si ces mesures sont effectuées conformément à la loi, de façon non discriminatoire pour des motifs expressément établis dans les Constitutions politiques respectives indiquées à l'article 7.1 Ad du protocole joint, liées aux nécessités internes de cette Partie et avec une indemnisation rapide, adéquate et effective.

2. L'indemnisation concernant les actes mentionnés aux paragraphes 1. a) et b) du présent article, conformément aux principes du droit international, s'élèvera à la valeur réelle de l'investissement immédiatement avant que les mesures soient prises ou avant que des mesures imminentes soient rendues publiques, selon le premier des deux événements. Cette indemnisation doit comprendre les intérêts jusqu'à la date du paiement; elle doit être versée sans retard injustifié, être effectivement réalisable et libre de transfert conformément aux règles stipulées à l'article 6 sur le rapatriement des capitaux et de bénéficiaires d'investissements; en cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements, le transfert d'au moins un tiers par an est garanti.

3. Le ressortissant ou l'entreprise affecté a le droit, conformément à la loi de la Partie contractante qui adopte les mesures impliquées, de faire réviser rapidement, par une autorité compétente de cette Partie contractante, la situation et l'estimation de son investissement conformément aux principes établis aux paragraphes 1 et 2 de cet article.

4. Si une Partie contractante adopte l'une des mesures mentionnées aux paragraphes 1 a) et b) de cet article, concernant les avoirs d'une entreprise immatriculée ou constituée conformément à la loi en vigueur dans une partie de son territoire, dans laquelle des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante sont propriétaires d'actions, elle doit s'assurer que les dispositions des paragraphes 1 à 3 de cet article s'appliquent de façon à garantir une indemnisation rapide, adéquate et effective concernant les investissements de ces ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante au propriétaire des actions.

5. Aucune des dispositions du présent Accord n'oblige l'une des Parties contractantes à protéger les investissements de personnes impliquées dans des activités criminelles graves.

#### *Article 8. Indemnisation pour perte*

1. Les ressortissants ou entreprises de l'une des Parties contractantes qui ont subi des pertes en raison de guerres ou d'autres conflits armés, de révolution, d'état d'urgence nationale, de l'état de siège, d'insurrection ou d'autres événements similaires, sur le territoire de l'autre Partie contractante, se voit accorder par cette dernière un traitement non moins favorable que celui accordé par ladite autre Partie à ses propres ressortissants ou entreprises, ou aux ressortissants ou entreprises d'un État tiers en matière de restitution et d'indemnisation. Ces restitutions et indemnisations peuvent être librement transférées conformément aux dispositions de l'article six du présent Accord.

2. Sous réserve du paragraphe 1 de cet article, dans l'hypothèse où les ressortissants ou entreprises d'une Partie contractante, dans l'une des situations mentionnées au paragraphe précédent, subissent l'occupation de leurs biens par des actes contraignants des autorités de l'autre Partie contractante, celles-ci les leur restituera. Si ces biens sont perdus en raison des dommages à la propriété causés par des actes contraignants des autorités de l'autre Partie contractante qui n'étaient pas justifiés par la situation, une indemnisation adéquate leur sera accordée. Les paiements effectués à ce titre sont librement transférables conformément à l'article six du présent Accord.

*Article 9. Subrogation*

1. Si l'une des Parties contractantes ou son agent autorisé effectuent des paiements à ses ressortissants ou entreprises au titre d'une indemnité accordée en raison d'un investissement contre les risques non commerciaux sur le territoire de l'autre Partie contractante cette dernière, sous réserve des droits accordés à la première Partie contractante en application de l'article 13, reconnaît le droit de faire valoir par subrogation tous les droits des ressortissants ou entreprises de la première Partie contractante ou de son agent autorisé, que ce soit en vertu de la loi ou d'une transaction légale.

2. De même, l'autre Partie contractante reconnaîtra le motif et la portée de la subrogation de la première Partie contractante ou de son agent autorisé dans tous les droits des titulaires précédents, conférés conformément au présent Accord.

*Article 10. Application de l'Accord*

Le présent Accord s'applique aux investissements effectués par les ressortissants ou entreprises d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur de cet Accord.

*Article 11. Traitement le plus favorable*

Si l'une des dispositions juridiques de l'une des Parties contractantes ou des engagements des Parties contractantes va au-delà de ce qui est accordé dans le présent Accord, il en découlera une réglementation générale ou spéciale en vertu de laquelle les investissements des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante se verront accorder un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ladite réglementation prévalant sur cet Accord, en ce qu'elle est plus favorable.

*Article 12. Règlement de différends entre une partie contractante et un ressortissant ou une entreprise de l'autre partie contractante*

1. Les litiges de nature juridique surgissant entre une Partie contractante et un ressortissant ou entreprise de l'autre Partie contractante concernant les investissements concernés par le présent Accord doivent, dans la mesure du possible, être réglés à l'amiable entre les Parties au litige.

2. Si un litige ne peut être réglé de façon amiable par les Parties dans un délai de trois mois suivant la date de la notification écrite de la demande, il peut être soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, ou à l'arbitrage international du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé "le Centre").

3. Chaque Partie contractante à cet Accord consent à soumettre au Centre tout litige de nature juridique surgissant entre cette Partie contractante et un ressortissant ou entreprise de l'autre Partie contractante concernant un investissement de celle-ci sur le territoire de la première pour son règlement par conciliation ou arbitrage, selon les dispositions de la



Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965.

4. Une entreprise immatriculée ou constituée en vertu de la loi en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante et dans laquelle, avant le litige, la majorité des actions appartenait aux ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante sera traitée, conformément à l'article 25 2. b) de l'Accord, comme une entreprise de l'autre Partie contractante aux fins des dispositions de l'accord mentionné.

5. Si les ressortissants ou l'entreprise affectés consentent également par écrit à soumettre le litige au Centre pour la résolution de celui-ci par conciliation ou arbitrage conformément à l'Accord, l'une des Parties peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du centre, conformément aux dispositions des articles 28 et 36 de l'Accord. En cas de désaccord concernant la procédure la plus appropriée, de la conciliation ou de l'arbitrage, le ressortissant ou l'entreprise partie au litige aura le droit de choisir. La Partie contractante qui est partie au litige ne pourra à aucun moment objecter au processus ou à l'arbitrage, le fait que le ressortissant ou l'entreprise, qui est l'autre Partie au litige, a reçu une indemnisation totale ou partielle pour ses pertes, en application d'un contrat d'assurance.

6. Malgré les dispositions précédentes, le Centre ne peut statuer si la Partie qui entame la procédure a accepté, accepte de soumettre ou soumet le litige aux tribunaux administratifs ou judiciaires de la Partie contractante qui est partie au litige.

7. Aucune des Parties contractantes ne peut chercher la résolution d'un litige remis au Centre par la voie diplomatique, sauf si :

a) le Secrétaire général du Centre ou une Commission de conciliation ou encore un tribunal d'arbitrage constitué par le Centre, décide que le litige ne relève pas de sa compétence, ou

b) l'autre Partie contractante ne respecte pas une décision formulée par un tribunal d'arbitrage.

### *Article 13. Règlement des différends entre les Parties contractantes*

1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation et l'application du présent Accord doivent, dans la mesure du possible, être réglés par les Gouvernements des deux Parties contractantes, par la voie diplomatique.

2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, dans un délai de trois mois à partir de la date où l'une des Parties contractantes au différend l'a provoqué, il sera soumis à un tribunal arbitral sur la demande de l'une des Parties contractantes.

3. Ce tribunal arbitral sera constitué ad hoc. Chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres se mettent d'accord pour choisir comme président un ressortissant d'un État tiers qui sera nommé par les Gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de trois mois, après que chacune des Parties contractantes a communiqué à l'autre qu'elle souhaite soumettre le litige à un tribunal d'arbitrage.

4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et en l'absence d'autres règlements, chaque Partie contractante peut inviter le président de la cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Dans l'hypothèse où le président est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou qu'il est empêché, pour un autre motif, de procéder à ces nominations, le vice-président sera chargé d'effectuer celles-ci. Si le vice-président est également un ressortissant de l'une des deux Parties contractantes ou s'il ne peut effectuer ces nominations, un membre de la Cour qui siège immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties contractantes effectuera ces nominations.

5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais générés par l'activité de son arbitre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral établit lui-même son règlement intérieur.

*Article 14. Interruption des relations diplomatiques ou consulaires*

Les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer pleinement quel que soit l'état des relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties contractantes.

*Article 15. Entrée en vigueur, durée et résiliation de l'Accord*

1. Chaque Partie contractante informe l'autre de l'accomplissement des procédures imposées par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la seconde notification. Il est valable pendant dix ans et se proroge ensuite pour une durée indéfinie, sauf si l'une des Parties contractantes informe l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin douze mois avant son expiration.

3. Les investissements réalisés avant la date de résiliation du présent Accord continuent d'y être soumis pendant dix ans suivant cette date.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Lima, le 26 avril 1994, en deux exemplaires en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

NOEMI SANIN DE RUBIO  
Ministre des relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER  
Président du conseil des ministres et Ministre des relations extérieures

## PROTOCOLE

Dans l'acte de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, les soussignés ont convenu des dispositions suivantes supplémentaires, qui font Partie intégrante de cet Accord :

Concernant l'article 1 (1)

La République de Colombie ne considère pas les prêts comme des investissements.

Concernant les articles 3 (2) et 4

La République de Colombie peut imposer ou faire appliquer des limitations concernant l'octroi de traitement national uniquement dans les secteurs suivants :

- a) acquisition pouvant se faire par le biais d'investissements de portefeuille;
- b) services publics (télécommunications, énergie et aqueduc, assainissement);
- c) fourniture de biens et de services au secteur public; et
- d) assemblage automobile.

La République de Colombie n'applique pas aux ressortissants ou entreprises de la République du Pérou les limitations précédemment mentionnées, dans la mesure où les règles de l'ordre juridique de l'Accord de Carthagène le stipulent, conformément aux articles 5 et 11 du présent Accord.

Concernant l'article 7 (1)

Les motifs expressément établis par les Constitutions politiques respectives sont :

- a) pour la République de Colombie : l'utilité publique ou l'intérêt social; et
- b) pour la République du Pérou : la sécurité nationale ou la nécessité publique.

Concernant l'article 12

Avant que la République de Colombie n'adhère à l'accord mentionné au paragraphe 3 de l'article 12, tout litige auquel elle est Partie et qui est soumis au Centre sera traité conformément aux mécanismes complémentaires pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'enquête.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

NOEMI SANIN DE RUBIO  
Ministre des relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER  
Président du conseil des ministres et Ministre des relations extérieures

PROTOCOLE DE MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou;

Afin de créer des conditions favorables aux investissements réalisés par des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements stimulent l'initiative commerciale individuelle et augmentent la prospérité des deux États; et,

Afin de faire appliquer l'accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection ainsi qu'aux investissements conclu à Lima le 26 avril 1994,

Ont convenu ce qui suit :

*Article Premier*

L'article 7 de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements se lira comme suit :

*Expropriations et mesures équivalentes*

1. Les investissements de ressortissants ou d'entreprises de l'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, à :

a) la nationalisation ou des mesures équivalentes, par le biais desquelles une Partie contractante prend le contrôle de certaines activités considérées comme stratégiques dans sa législation interne, ou des services, ou

b) tout autre forme d'expropriation ou de mesures ayant un effet équivalent,

sauf si ces mesures sont effectuées conformément à la loi, de façon non discriminatoire pour des motifs expressément établis dans les Constitutions politiques respectives indiquées à l'Ad article 7.I du protocole joint, liées aux nécessités internes de cette Partie; elles feront alors l'objet d'une indemnisation rapide, adéquate et effective.

2. L'indemnisation concernant les actes mentionnés aux paragraphes 1. a) et b) du présent article, conformément aux principes du droit international, s'élèvera à la valeur réelle de l'investissement immédiatement avant que les mesures soient prises ou avant que des mesures imminentes soient rendues publiques, selon le premier des deux événements. Cette indemnisation doit comprendre les intérêts jusqu'à la date du paiement; elle doit être versée sans retard injustifié, être effectivement réalisable et libre de transfert conformément aux règles stipulées à l'article 6 sur le rapatriement des capitaux et de bénéficiaires d'investissements; en cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements, le transfert d'au moins un tiers par an est garanti.

3. Le ressortissant ou l'entreprise affectée a le droit, conformément à la loi de la Partie contractante qui adopte la mesure concernée, de faire réviser rapidement, par l'autorité compétente de cette Partie contractante, la situation et l'estimation de son investissement conformément aux principes établis aux paragraphes 1 et 2 de cet article.

4. Si une Partie contractante adopte l'une des mesures mentionnées aux paragraphes 1 a) et b) de cet article, concernant les avoirs d'une entreprise immatriculée ou constituée conformément à la loi en vigueur dans une partie de son territoire, dans laquelle des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante possèdent des actions, elle doit s'assurer que les dispositions des paragraphes 1 à 3 de cet article s'appliquent de façon à garantir une indemnisation rapide, adéquate et effective concernant les investissements des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante, propriétaire des actions.

5. Aucune des dispositions du présent Accord n'oblige l'une des Parties contractantes à protéger les investissements effectués avec des capitaux ou des avoirs qui, selon la législation de chaque Partie contractante, proviennent d'activités délictueuses.

6. En ce qui concerne la Colombie, aucune des dispositions du présent Accord n'interdit, conformément à la loi, à des fins d'intérêt public ou social, de créer des monopoles comme des charges financières, après indemnisation complète des investisseurs privés de l'exercice d'une activité économique licite, en tenant compte des conditions applicables du présent article.

#### *Article 2*

Aucune des dispositions du présent Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et la protection des investissements, conclu à Lima le 26 avril 1994, ni les dispositions du présent Protocole ne peuvent être interprétées comme empêchant qu'une partie adopte ou maintienne des mesures destinées à préserver l'ordre public.

#### *Article 3*

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu à Lima le 26 avril 1994. Il entrera en vigueur à la date mentionnée dans l'Accord cité.

Fait à Lima, le sept mai 2001, en deux exemplaires de même teneur, en langue espagnole, les deux textes ayant la même valeur.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO  
Ministre des relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :

AMBASSADEUR JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR  
Ministre des relations extérieures

